

serie de debates  
**LA DEMOCRACIA** distopía,  
**IMPORTA:** resiliencia  
e innovación

16

**A POLÍTICA BRASILEIRA  
E A SOCIEDADE CIVIL  
POSSIBILIDADES E  
LIMITES DA CONSTRUÇÃO  
DE ESTRATÉGIAS DEMOCRÁTICAS  
MAIS AMPLAS E INCLUSIVAS  
PARA O PÓS-PANDEMIA**

**BIANCA ARRUDA,  
RITA BRANDÃO Y  
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES**

**A POLÍTICA BRASILEIRA  
E A SOCIEDADE CIVIL  
POSSIBILIDADES E  
LIMITES DA CONSTRUÇÃO  
DE ESTRATÉGIAS DEMOCRÁTICAS  
MAIS AMPLAS E INCLUSIVAS  
PARA O PÓS-PANDEMIA**

---

**BIANCA ARRUDA,  
RITA BRANDÃO Y  
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES**

## Equipo de trabajo

### **Editores**

Matías F. Bianchi e Ignacio F. Lara

### **Asistente de edición**

Esteban Tavera

### **Comunicación**

Aniela Stojanowski y Luciana Viera

### **Diseño**

Cartoncino

## Autores

**Bianca Arruda** é pesquisadora do Ibase, faz parte da equipe técnica das atividades de pesquisa que utilizam o Sistema de Indicadores de Cidadania – Incid. Doutora em Antropologia Social pelo PPGAS/MN- UFRJ. Faz parte do movimento de mulheres, onde atua em um coletivo de mulheres capoeiras.

**Rita Brandão** é Diretora Adjunta do Instituto Brasileiro de Análises Sociais e Econômicas – Ibase, Mestra em Serviço Social, Políticas Sociais e Trabalho (Uerj). Tem uma longa experiência em projetos e programas do setor público e em organizações do investimento social privado. No Ibase é diretora de referência da área de direitos humanos e coordenadora geral de atividades de pesquisa que utilizam o Sistema de Indicadores de Cidadania – Incid e Metodologias de desenvolvimento local de base comunitária. Faz parte do Movimento de Mulheres Negras e coordena ações do Ibase na área de Juventudes.

**Renan de Oliveira Rodrigues** é professor de sociologia no Ensino Médio, na rede estadual de ensino. Graduado na UFRJ e mestre em Ciências Sociais pelo CPDA/UFRRJ. Pesquisador em Participação Social e Segurança Alimentar e Nutricional (SAN) na Cidade do Rio de Janeiro. Desde 2015 atua na Rede Carioca de Agricultura Urbana (Rede CAU).

---

Este documento está disponible bajo Licencia Creative Commons Reconocimiento- Compartir Igual 4.0. Usted puede remezclar, retocar y crear a partir de esta obra, incluso con fines comerciales, siempre y cuando le dé crédito a las autoras y licencie nuevas creaciones bajo las mismas condiciones. Para ver una copia de esta licencia visite: <https://creativecommons.org/>

## Presentación Series Debate: La Democracia Importa

Aún antes de la aparición del COVID-19, que sigue teniendo en vilo al mundo entero acerca de sus consecuencias (en distintas dimensiones) a corto y -fundamentalmente- a largo plazo, en América Latina ya se habían prendido distintas alarmas acerca del estado de sus democracias. El desalentador panorama que se nos presenta con la expansión de la pandemia, y la profundización de sus consecuencias, pareciera indicar que dichas alarmas son hoy más intensas, urgentes y preocupantes.

La región registra los niveles más bajos de apoyo a la democracia y los niveles más bajos de confianza ciudadana a las instituciones públicas desde que éstas se miden (Latinobarómetro, 2018). Paralelamente, durante el 2019 observamos cómo, desde Haití hasta Chile, pasando por Nicaragua, Colombia, Ecuador y Bolivia, cada semana cientos de miles de personas salieron a la calle a manifestarse contra medidas del gobierno de turno. El sistema político, tanto gobiernos como partidos y parlamentos, así como los liderazgos sociales, parecieran incapaces de dar respuestas a las demandas sociales, tanto por la carencia de mecanismos adecuados para incorporarlas en el proceso de toma de decisiones como por la falta de legitimidad ciudadana que sufren estas instituciones públicas.

A su vez, ya antes de la llegada del COVID-19, América Latina se encontraba en una situación de alta vulnerabilidad económica, siendo la última década la de menor crecimiento económico en un siglo, lo cual va de la mano con el aumento sostenido entre 2014 y 2019 de la pobreza (pasando del 27,8% al 30,8%) y de la pobreza extrema (del 7,8% al 11,5%) en la región (CEPAL 2019). Esto, además de los desafíos que supone para enfrentar la actual pandemia, deja en evidencia las dificultades para avanzar en la agenda de desarrollo global. En función del reciente estudio de la CEPAL (2020), aún antes de suscitarse la emergencia del COVID-19, más del 70% de los indicadores de los ODS en América Latina y el Caribe necesitaban de una intervención fuerte de políticas públicas para alcanzar las metas establecidas, pues se encontraban en un estado de estancamiento o en retroceso. El panorama para el desarrollo de América Latina es, por esos motivos, aún más desalentador.

En este caldo de cultivo, la presencia de un personaje como Bolsonaro al frente del Poder Ejecutivo de Brasil consolida una tendencia de posiciones políticas en ascenso que se sirven de la antipatía social por la política para instaurar alternativas autoritarias y muchas veces abiertamente anti-democráticas.

Esta tendencia se consolida en los países del Atlántico Norte y va creciendo poco a poco en nuestros países, sin distinguir colores ideológicos, que incluyen tanto a Colombia con Duque, como a la Nicaragua con Ortega y Venezuela con Maduro. Se da un posicionamiento del miedo y el odio como medio para la concentración del poder y la instrumentalización del electorado, y el retorno al uso de la fuerza para la eliminación de alternativas políticas, estrategias que ya creíamos erradicadas del repertorio político de la región.

Cuando hace algunos años Larry Diamond nos alertaba sobre la recesión democrática (2015) que los países occidentales estaban experimentando, desde Asuntos del Sur no estuvimos de acuerdo con los términos de su análisis, ya que observábamos los mismos síntomas pero no compartíamos el diagnóstico. Frente a la creciente inestabilidad política, los bajísimos niveles de legitimidad de las instituciones representativas y las masivas protestas sociales, lo que testimoniábamos -en esa entonces- era la emergencia de una constelación de movimientos democratizantes que chocaban con la política tradicional. Especialmente en los países gobernados por la "marea rosa" progresista, vimos que el malestar se focalizaba en el agotamiento de la política tradicional, particularmente en las crecientes contradicciones que estos gobiernos experimentaban al profundizar el extractivismo, por permitir niveles de corrupción escandalosos y ser crecientemente intolerantes frente a la disidencia. Observamos, de hecho, avances de la democracia, mayores derechos a grupos en situación de vulnerabilidad, una creciente participación de las mujeres en política y una mayor inclusión social. En este sentido, las demandas de estos sectores se concentraban en la "forma" de ejercer el poder por parte de la política tradicional.

Criticamos, entonces, que las principales corrientes intelectuales no daban cuenta de un fenómeno político emergente al que nosotros denominamos como "innovación política" (Bianchi et al 2017). Estos movimientos, emergentes en los últimos 10 años y estrechamente vinculados al uso de tecnologías digitales, eran actores que proponían prácticas, principios y maneras de organización opuestos a la política representativa basada en partidos políticos. Los pingüinos chilenos, los #yosoy132 mexicanos, las #NiUnaMenos argentinas, el #PasseLivre brasileño son esencialmente democráticos, y (pese a sus respectivas particularidades) se caracterizaron por incluir a actores no tradicionales, defender prácticas abiertas, estructurarse horizontalmente y poseer esquemas de comunicación y acción distribuidas. Se nutrían del surgimiento de medios digitales independientes, y del uso de las redes sociales para democratizar el debate público. Es más, vimos con mucho entusiasmo en esos años, cómo algunos de esos



movimientos crecían y se volvieron alternativas electorales, como es el caso de Revolución Democrática, Wikipolítica, o Muitas. Entendimos que esa era una dirección auspiciosa y que -con la multiplicación de experiencias análogas- se volvía factible transformar cualitativamente las democracias de la región.

Lo cierto es que el escenario hoy es otro. El año 2016 marcó un cambio de época, cristalizándose triunfante la antipolítica y con ella se va inmiscuyendo paulatinamente el autoritarismo antidemocrático. Es el año donde se elige a Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, es al año del Brexit, y más por nuestros pagos, es la derrota del plebiscito por la paz en Colombia, el golpe blando a Dilma Rousseff, y en el que Maduro decide disolver al Congreso electo y con ello abandonar el último vestigio de democracia que le quedaba a su régimen. Algunos años después, con la elección de Bolsonaro como presidente del país más grande de la región, se consolida un paradigma político en el cual la política pasa a perder prácticamente su capacidad de intermediación frente a los poderes de facto, en el que el autoritarismo anti-democrático se va despojando de su timidez y en el que decidir participar en política se ha tornado un riesgo de vida para muchas personas.

La tecnología digital, que creíamos la principal aliada de la innovación política -por su potencial para democratizar el debate, distribuir liderazgos, abrir gobiernos y transparentar procesos-, hoy se parece a uno de los episodios más cruentos de la conocida serie "Black Mirror", transformándose en uno de los principales instrumentos de control, opresión y manipulación por parte de los poderosos hacia las mayorías. Asimismo, una parte considerable de los movimientos emergentes desaparecieron o se volvieron testimoniales. Varios países están experimentando records en asesinatos a líderes sociales (Front Line Defenders, 2019); la prensa independiente se encuentra crecientemente asediada y en su peor momento en los últimos 13 años (Freedom House); y los Estados cada vez más se sirven de tecnologías para para vigilar y controlar a sus ciudadanos (Tactical Tech 2019).

Ante todo esto, la irrupción del COVID-19 en el mundo y en nuestra región, produjo cambios profundos en nuestras sociedades y una parte considerable de sus efectos de largo plazo son, hoy en día, producto de especulaciones. Es por ello que resulta fundamental invitar a una reflexión profunda acerca de la situación de las democracias en América Latina en el escenario actual, en modo de identificar las principales variables, los actores y los desafíos actuales, así como dilucidar la posibilidad de dinamizar procesos políticos innovadores a lo largo de la región.


Como horizonte, se trata de avanzar en la identificación de prácticas, diseños institucionales, políticas públicas, tecnologías, y formas de organización del poder en la sociedad que permitan reconstruir lazos entre Estado y sociedad de una forma inclusiva y democrática. Mediante esta serie de papers, que tendrán un alcance analítico regional, se espera llegar a tener una visión programática preliminar sobre los principales desafíos de la región, conocer las líneas de investigación-acción que se están llevando a cabo, los actores, para así poder identificar faltantes, prioridades y agendas que puedan permitir un aporte al debate sobre la democracia en América Latina.

**Matías F. Bianchi e Ignacio F. Lara**

## Referencias bibliográficas

- Bianchi, Matías; León, Cristian y Perini, Antonela (2017), "Transformaciones de la participación política en América Latina", *Asuntos del Sur*.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2019), *Panorama Social de América Latina*, (LC/PUB.2019/22-P/Re v.1), Santiago.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe (2020), *La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible en el nuevo contexto mundial y regional: escenarios y proyecciones en la presente crisis*, (LC/PUB.2020/5), Santiago.
- Diamond, Larry (2015), Facing Up to the Democratic Recession, *Journal of Democracy* 26, pp. 141-155..
- Freedom House (2019), "Freedom on the Net. Crisis of Social Media".
- Front Line Defenders (2018), *Defenders Global Analysis 2018*. Dublin.
- Corporación Latinobarómetro (2018), *Informe 2018*. Santiago.
- Tactical Tech (2019), "Personal Data: Political Persuasion. Inside the influence industry. How it works".





# A POLÍTICA BRASILEIRA E A SOCIEDADE CIVIL POSSIBILIDADES E LIMITES DA CONSTRUÇÃO DE ESTRATÉGIAS DEMOCRÁTICAS MAIS AMPLAS E INCLUSIVAS PARA O PÓS-PANDEMIA

BIANCA ARRUDA,  
RITA BRANDÃO Y  
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES

## Resumo

O presente trabalho visa contribuir para um debate sobre o que vem se passando com a democracia no Brasil neste momento de enfrentamento da pandemia provocada pela Covid-19. Buscamos apresentar dados sobre os impactos da pandemia no país, as principais medidas sociais e econômicas implementadas pelo governo e como tais medidas impactam os grupos historicamente vulnerabilizados.

Não é novidade enunciar que o Brasil é de longa data um país extremamente desigual, onde o racismo estrutural, o patriarcalismo e a desigualdade econômica são barreiras à nossa democracia. Tal estrutura histórica, somada a um recente processo de implementação de uma agenda econômica ultraliberal com a precarização da força de trabalho, o aumento das privatizações e uma gestão “empresarial” do Estado, contribui para o aumento dessas desigualdades. Soma-se a isso a tentativa de adoção de medidas autoritárias que fragilizam o Estado democrático de Direito. São esses os principais fatores que caracterizam a conjuntura sociopolítica imediatamente anterior à chegada da pandemia no país e são fundamentais quando buscamos refletir sobre as graves consequências que esta pandemia pode gerar.

Este texto busca contribuir com a reflexão acerca das ações possíveis de construção de uma nova agenda democrática com participação e maior inclusão social, fundamentais para o Brasil no pós-pandemia.

**Palavras-chave:** Brasil, Covid-19, racismo, desigualdade.



## Antecedentes

Nosso olhar para o passado poderia começar de vários pontos. Nos anos recentes, o campo político e econômico brasileiro começou a sofrer profundas transformações, mas vamos adotar como marco o ano de 2017, período pós-impeachment da ex-presidenta Dilma Rousseff, do Partido dos Trabalhadores (PT).

Dilma Rousseff sofreu impeachment em 31 de agosto de 2016. Seu segundo mandato como presidenta foi marcado por uma intensa instabilidade política, o que a levou a ampliar alianças com partidos diversos do chamado “Centrão”<sup>1</sup> para enfrentar projetos de lei que tornavam inviável a redução de gastos necessária para garantir a meta fiscal e enfrentamento da recessão econômica iniciada em 2014. Também teve que lidar com a construção midiática da operação Lava-Jato<sup>2</sup> que ganhava cada vez mais popularidade, alimentada pela imagem negativa construída sobre o PT e a esquerda como um todo, associados à corrupção – algo que já havia se iniciado nas tratativas do Mensalão<sup>3</sup>.

Após o impeachment, o vice-presidente Michel Temer (MDB) assumiu o governo. Um ano antes, em 2015, o MDB havia apresentado o programa “Uma ponte para o futuro”, no qual se evidenciava a intenção da implementação de uma agenda ultraliberal no país<sup>4</sup>.

Além de uma virada conservadora com identificação de princípios da extrema direita, há alguns objetivos centrais na implementação dessa agenda ultraliberal: radicalizar o ideário de “Estado mínimo”, atuando fortemente contra os gastos em políticas sociais; implementar privatizações de empresas estatais; desindustrializar o país; fortalecer ainda mais o capitalismo imperialista, com abertura ao capital

---

1. Refere-se a um conjunto de parlamentares da Câmara de deputados que não possuem uma orientação ideológica específica e tem como objetivo assegurar uma proximidade ao poder executivo de modo que este lhes garanta vantagens e lhes permita distribuir privilégios. Em geral, reúne parlamentares de partidos de orientação conservadora que atuam conforme seus próprios interesses.

2. Lava Jato: nome dado a operação da polícia federal que teve como objetivo investigar um esquema de corrupção entre empresários e políticos iniciado em um contrato da Petrobras. A investigação começou em 2008 e já condenou mais de 100 pessoas entre políticos, doleiros e empresários.

3. Mensalão: termo por meio do qual a imprensa em geral nomeou um esquema de repasse de fundos de empresas privadas para diferentes partidos para conquistar o apoio de políticos no início dos anos 2000. Os partidos em evidência na época foram PTB, PT e PMDB – atual MDB –, ligados a base aliada do então governo federal do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

4. Ver: <https://www.fundacaoulisses.org.br/wp-content/uploads/2016/11/UMA-PONTE-PARA-O-FUTURO.pdf>



financeiro internacional; investir no mercado de *commodities*; flexibilizar leis trabalhistas para aumento da exploração da força de trabalho; flexibilizar leis ambientais para aumento da exploração dos recursos naturais; e operacionalizar um desmonte dos espaços de participação democrática e popular, que no Brasil já se encontravam bastante fragilizados.

Assim, logo nos primeiros meses do governo de Michel Temer, temos o primeiro marco com a promulgação da Emenda Constitucional N° 95, conhecida como “Emenda do Teto dos Gastos”, através da qual foram congelados os gastos públicos com despesas primárias na área social por 20 anos, tendo como valor referência o do ano de 2016. Essa Emenda afeta drasticamente os investimentos em saúde, educação e assistência social. Seus defensores reforçavam a necessidade de equilíbrio fiscal, questionavam o Estado ampliado e pregavam a necessidade urgente de reduzir despesas. Os que eram contrários à Emenda buscavam mostrar que com reajustes nos orçamentos a área social já operava defasada e com o congelamento aumentariam as vulnerabilidades sociais e o empobrecimento da população, processos já presentes no país. Muitos defendiam a necessidade de um amplo debate, que por sua vez não ocorreu.

Após a promulgação da Emenda Constitucional do Teto dos Gastos, a reforma da previdência (PLC 287/2016) e a Reforma Trabalhista (PLC 38/2017) passaram a ser as pautas prioritárias. A reforma trabalhista foi sancionada pelo presidente Michel Temer no dia 13 de julho de 2017. Os defensores desta reforma argumentavam que se fazia necessário flexibilizar as relações de trabalho para que fosse possível ao empresariado gerar mais empregos, em uma conjuntura de aumento anual do desemprego desde o ano de 2014. A narrativa construída estava pautada nas dificuldades do empresariado em investir para a abertura de mais postos de trabalho, causada pelo excesso de burocracia e tributação nas contratações; argumentava-se que eram demasiados os direitos trabalhistas e existia um “ativismo” da Justiça do Trabalho, pondo-a como inimiga do empresariado, o que, na verdade, gerava um entrave para a geração de empregos. Das mudanças implementadas, destacamos a livre negociação patrão-empregado frente certas legislações, o fim da contribuição sindical obrigatória e a criação do trabalho intermitente, onde o trabalhador pode receber por hora trabalhada sem que seja necessária uma carga-horária mínima. Às vésperas de um ano eleitoral, o governo de Michael Temer não conseguiu força política para implementar a reforma da previdência.

Em 2018 vivemos um processo de polarização política institucional que foi extremamente acirrada e evidenciada nas eleições. Com forte apoio midiático construiu-se uma crítica contundente ao Partido dos Trabalhadores (PT), no governo há 12 anos, pautada principalmente no combate a corrupção –a qual se buscou incessantemente associar ao partido, na tentativa de impedir e desqualificar a candidatura de seus representantes à eleição, apesar de não ser o partido com o maior número de investigações na operação “Lava-Jato”<sup>5</sup>. O antipetismo construído ao largo de dois anos, desde o impeachment, foi mobilizado incessantemente –e ressoa até os dias de hoje.

A campanha do candidato Jair Bolsonaro, deputado federal recém-migrado ao Partido Social Cristão (PSC), foi contundente na promessa de combate ao crime organizado –pautado na flexibilização do Estatuto do Desarmamento, trazendo regras mais flexíveis para a aquisição e uso de armas de fogo e no armamento de civis para combater a violência– e principalmente no combate à corrupção. Pregou ainda o combate ao “ideário comunista” dos governos de esquerda, o respeito à família, a defesa do projeto “Escola sem partido”<sup>6</sup> e o fim da “ideologia de gênero”<sup>7</sup>. Sob o slogan de “conservador nos costumes e liberal na economia” cresceu acompanhado de um fundamentalismo cristão neopentecostal amplamente disseminado no país. As mídias digitais foram ativadas intensamente e muitos eleitores foram atingidos por enxurradas de informações, dentre elas notícias falsas, as “fake news”, que se caracterizaram como um dos artifícios de comunicação eficaz para atingir um número grande de pessoas<sup>8</sup>.

O pleito acabou vencido por este candidato representando uma junção das alas mais radicais da direita parlamentar unindo a bancada ruralista, boa parte dos evangélicos e do militarismo. Seu lema foi “Brasil acima de tudo, Deus acima de todos”. O verde e amarelo, utilizado largamente nas manifestações em prol do impeachment de Dilma, passou a estar associado à sua candidatura. Bolsonaro foi eleito no segundo turno das eleições presidenciais com 57,7 milhões de votos, con-

---


5 Mais de 15 partidos de diferentes orientações foram investigados com envolvimento no esquema sendo com mais ocorrência o Partido Progressista (PP).

6. É um movimento criado em 2004 que tomou força a partir de 2015. Formado sobretudo por pais e alunos que afirmam haver uma “doutrinação ideológica” nas escolas, o movimento defende principalmente uma suposta neutralidade na educação e a preponderância dos valores familiares sobre a educação escolar.

7. Termo criado por defensores do movimento Escola sem partido contrários ao debate sobre educação sexual e questões de gênero no ambiente escolar. Afirmam que este debate deve estar restrito ao ambiente familiar por considerarem que a escola menospreza valores familiares e incentive a homossexualidade.

8. Tramita hoje no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) um processo para apurar o disparo de notícias falsas nas eleições por cabos eleitorais e pessoas próximas ao presidente Jair Bolsonaro.





tra 47 milhões de votos de Fernando Haddad (PT) e 31,3 milhões de abstenções; soma-se ainda 2,4 milhões de votos em branco e 8,6 milhões de votos nulos.

A mesma polarização expressa na disputa eleitoral se estendeu também nas eleições para o Congresso Nacional, para os governos de estado e para as Assembleias Legislativas. No Congresso, se verificou uma considerável renovação dos quadros políticos com a não reeleição de antigos “caciques” e maior fragmentação das legendas partidárias também em função de rejeição às tradicionais legendas e discurso crítico ao sistema político corrupto. Por outro lado, também aumentou o caráter conservador dos parlamentares com a presença de mais militares e representantes de igrejas evangélicas.

No primeiro dia do governo de Jair Bolsonaro (PSL), alguns aspectos já nos ajudavam a entender o que estaria por vir. Primeiro, sua equipe de 22 ministros era na quase totalidade composta por homens brancos, com apenas duas mulheres e total ausência de diversidade racial.

Na economia, explicitou sua política liberal e privatista desenhada pelo escolhido para a pasta da economia, o economista Paulo Guedes. A primeira grande reforma implementada no ano de 2019 foi a da previdência social. O argumento de Guedes foi a necessidade de diminuir ainda mais os gastos do Estado e realizar ajustes fiscais. Defensores desta proposta falavam ainda em corte dos privilégios dos funcionários públicos frente aos funcionários de empresas privadas. Os próprios números sobre os quais se assentavam a reforma eram postos em dúvida. Faltou debate público e apenas alguns setores mais próximos ao governo conseguiram abrandar os impactos da reforma sobre suas categorias, como os militares, por exemplo.

Destaca-se, contudo, que as reformas realizadas –tanto a da previdência, quanto a reforma trabalhista implementada por Temer– não deram conta de alavancar a economia nacional ou melhorar as condições de vida da maioria dos(as) trabalhadores(as). Pelo contrário, o que identificamos foi uma crescente precarização do trabalho e altas taxas de desemprego, e o Brasil com fortes indícios de retorno ao Mapa da Fome da ONU, de acordo com o relatório “O estado da segurança alimentar e da fome no mundo”<sup>9</sup>. Em recente estudo realizado pelo Ibase em 2019 no Conjunto de favelas do Alemão, observou-se que para 83% dos moradores existem pessoas que passam fome na região. Ou seja, a falta de alimentos para sobrevivência é vista de perto por quem

---

9. Ver: <http://www.fao.org/publications/sofi/en/>

vive por lá. Além disso, 63% das pessoas que moram no Complexo do Alemão vivem com renda máxima de até um salário. Destas, 24% não contam com nenhuma renda<sup>10</sup>.

Cabe destacar que, um dos primeiros atos do atual governo foi reduzir as atribuições do Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (Consea), o que implicava, na prática, na extinção desse conselho, o que já nos apontava para onde iriam as políticas de combate à fome e à miséria no país. Houve ainda atos que se sucederam a este, extinguindo os mais diversos conselhos, com o intuito de acabar com a participação social na gestão das políticas públicas. Não custa recordar que nas eleições também se evidenciaram os discursos de criminalização dos movimentos sociais e organizações da sociedade civil –que acabaram encaixados na lógica de integrantes da ideologia “esquerdista”, portanto, corrupta.

Ao longo desses dois anos de governo, Bolsonaro foi muitas vezes acusado por restringir a liberdade de imprensa. Segundo a Ong Repórteres Sem Fronteira, o Brasil se tornou um “antimodelo” no quesito de respeito à liberdade de imprensa: mostra um quadro ainda mais grave dado o apoio de lideranças políticas para o comportamento hostil contra jornalistas. O ‘gabinete do ódio’ que cerca o presidente brasileiro publica ataques em larga escala a jornalistas que fazem revelações sobre políticas do governo, o que coloca atualmente o país na 107ª posição do ranking mundial de liberdade de imprensa, caindo de posição pelo segundo ano seguido.

No estado do Rio de Janeiro, o governador que se elegeu associando sua imagem à do então candidato à Presidência Jair Bolsonaro, se notabilizava pela postura de combater o crime organizado através da retórica da “guerra ao tráfico”. Através de uma necropolítica de Estado, sobretudo na área da segurança pública, as operações policiais nas áreas mais empobrecidas da cidade, principalmente nas favelas e periferias, seguiram com muita violência e letalidade. O resultado dessa política é o aumento da morte de moradores de periferia, sobretudo os jovens negros. A novidade no governo Witzel foi o uso de “Snipers” em helicópteros como plataformas de tiro. Há décadas que a política de segurança pública do estado nas favelas e periferias cariocas implementa operações policiais violentas e violadoras de direitos humanos, passando a haver um discurso de governo que oficializava e promovia incentivo às ações violentas e uma certa liberação da permissão para matar, com a certeza da impunidade<sup>11</sup>. Essa era nossa tragédia coletiva já “normalizada” no período que antecede a pandemia.

10. Ver: <https://ibase.br/pt/destaques/pesquisa-do-ibase-revela-indicadores-de-cidadania-do-complexo-do-alemao/>

11. De acordo com dados do Fórum de Segurança Brasileiro em parceria com o Núcleo de Estudos da



## A chegada da pandemia no Brasil

No dia 17 de março foi registrada a primeira vítima da Covid-19 no Rio de Janeiro: uma empregada doméstica de 63 anos que trabalhava no Leblon, bairro da zona sul, de classe média alta da cidade, mas que morava em Miguel Pereira –cidade que fica a 120 quilômetros do Leblon<sup>12</sup>. No mesmo dia da morte da primeira vítima da pandemia no estado, o governo do Rio de Janeiro promulgou um Decreto restringindo a circulação de pessoas, a suspensão de atividades, o fechamento (ou a redução no atendimento) de estabelecimentos.

Esse primeiro caso com óbito no Rio de Janeiro pode ser considerado emblemático do modo como estamos vivenciando os impactos da pandemia da Covid-19 no país: uma senhora idosa, negra, empregada doméstica não pôde realizar o isolamento social para sua proteção por precisar sobreviver com a renda do seu trabalho; com isso, adquiriu a doença de patrões que haviam voltado de viagem à Itália –epicentro da pandemia à época– e rapidamente faleceu. Seus patrões, mesmo com a suspeita do adoecimento, não dispensaram a empregada e tiveram a confirmação da contaminação pouco tempo antes do falecimento da mesma.

Os impactos da pandemia têm aumentado a desigualdade social existente, afetando sobremaneira as populações que já são historicamente vulnerabilizadas e que vem sendo impactadas pelas já citadas perdas de direitos frente ao avanço da agenda ultraliberal no país.

Enquanto escrevemos esse paper, no dia 30 de agosto, já havíamos chegado o número oficial de 120.828 óbitos registrados, uma média de contágio de 44.766 pessoas e média de 1.016 óbitos por dia. No total, 3.862.311 pessoas estão ou já foram infectados. Com esses números, o Brasil ocupa o segundo lugar entre os países com mais casos e óbitos confirmados atrás apenas dos Estados Unidos. A pandemia da Covid-19 já se trata da maior tragédia sanitária na história do país. Já na cidade do Rio de Janeiro tínhamos um total de 223.302 casos confirmados 16.027 óbitos<sup>13</sup>.

---

Violência da USP, em 2019, foram 1.810 pessoas mortas em operações por policiais, uma taxa de 10,5 assassinatos a cada 100 mil habitantes, 30% do total de mortes pela polícia no país. Essa taxa foi a mais alta desde 1998, quando se iniciou a série histórica Ver: <https://g1.globo.com/monitor-da-violencia/noticia/2020/04/16/numero-de-pessoas-mortas-pela-policia-cresce-no-brasil-em-2019-assassinatos-de-policiais-caem-pela-metade.ghtml>

12. Cerca de 2 milhões de moradores da Região Metropolitana do Rio de Janeiro precisam se deslocar para a capital em busca de oportunidades de emprego, cultura, lazer, hospitais, dentre outros. Em relação às oportunidades de emprego, a cidade do Rio de Janeiro concentra as vagas com melhores salários, além de ter uma maior proporção de empregos formais (33,9 empregos a cada grupo de 100 habitantes).

13. Dados obtidos através do site de monitoramento <https://covid19br.wcota.me/#suspects> <visitado no

No Rio, assim como em outras capitais do Brasil, com o passar do tempo, a pandemia tem evidenciado que o principal fator de morte por Covid-19 é a vulnerabilidade das pessoas, causada por uma grande desigualdade social. É a população negra, pobre e moradora de bairros pobres, favelas e periferias, com precário fornecimento de água e esgotamento sanitário, sem condições de obter adequadamente itens básicos de higiene, com pouca estrutura domiciliar para fazer o isolamento necessário, que muitas vezes não pode deixar de trabalhar e que depende da saúde pública –onde não há estrutura para o tratamento de todos que precisam, que mais vem sentido os efeitos mortais da pandemia da Covid-19.

Esse é um ponto importante a ser destacado sobre a desigualdade brasileira. A doença chega ao Brasil por pessoas que vieram de fora pra cá (sobretudo da Europa). Quase que imediatamente a questão da desigualdade se impõe como imperativa, pois estas pessoas por onde chega a doença no país tem toda a possibilidade de se tratar, de fazer testes particulares, de se internar em bons hospitais. Em pouco tempo essa camada da sociedade se organiza para trabalhar remotamente, para tirar os filhos das escolas e viabilizar as aulas de forma online, consegue fazer o necessário isolamento em casas que, na maioria das vezes tem um cômodo para cada pessoas, com total infraestrutura e muitas vezes não dispensaram suas empregadas domésticas.

Em levantamento realizado pela Agência Pública, com base nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde, foi possível verificar que, no período de duas semanas, o número de pessoas negras mortas por coronavírus era cinco vezes maior que o número de brancos<sup>14</sup>. Esses dados com informações sobre óbitos e internações por cor e raça foram disponibilizados até final de abril e depois foi suspensa sua divulgação.

Organizações da sociedade civil vêm buscado formas de monitorar como a doença impacta de forma desigual a população negra e branca, ricos e pobres. Atualmente, as análises têm buscado correlacionar casos e óbitos identificados pelo Código de Endereçamento Postal (CEP), como, por exemplo, o realizado pela Teia de Solidariedade da Zona Oeste. Esse procedimento revela que ainda que o número de casos identificados seja maior em bairros de classe média e média alta, a taxa de letalidade é muito mais elevada em bairros periféricos e favelas, onde a população é majoritariamente negra<sup>15</sup>.


---

dia 30 de agosto de 2020>.

14. Ver: <https://apublica.org/2020/05/em-duas-semanas-numero-de-negros-mortos-por-coronavirus-e-cinco-vezes-maior-no-brasil/>

15. Ver, por exemplo: <https://rioonwatch.org.br/?p=48543>





Como aponta Rolnik (1989): “é perfeitamente plausível falar-se em segregação racial, discriminação e dominação branca nessas sociedades: a história do Rio e de São Paulo é marcada pela marginalização e estigmatização do território negro”<sup>16</sup>. Para dar seguimento à reflexão, vamos pontuar como a pandemia do coronavírus acelerou ainda mais o estado de exceção nas favelas como uma política de morte implementada pelo Estado, abordando especificamente o contexto na cidade do Rio de Janeiro. Tomamos como referência o conceito de necropolítica (Mbembe, 2003), na qual o governante escolhe quem morre e quem vive, e que não apenas retira o direito à vida por meio da violência, ao nosso ver, ao precarizar e vulnerabilizar ou não tomar medidas de proteção à vida das/os moradores de favelas e periferias, ao não garantir condições mínimas de uma vida digna e o acesso ao direito à saúde mesmo diante da pandemia da Covid-19, também explicitamente atribui validade à umas vidas e não às outras, definindo a vida e possibilidade de morte.

## **Negacionismo, desinformação e incentivo ao afrouxamento do isolamento social**

Desde a chegada da pandemia ao país, o presidente Jair Bolsonaro buscou diminuir os possíveis impactos do vírus e se posicionou contrário ao isolamento social e o fechamento de estabelecimentos como medida preventiva. A posição negacionista do presidente prosseguiu, mesmo com a escalada de casos no mundo e o grande avanço do vírus no Brasil. Foi comum ver Bolsonaro ir ao encontro de sua base popular, manifestações públicas e eventos oficiais sem os devidos cuidados já indicados por sanitaristas e autoridades em saúde no país e no mundo<sup>17</sup>.

O Presidente defendeu veementemente a necessidade da economia continuar operando, considerando que o impacto econômico poderia ser mais prejudicial do que a disseminação do vírus, mesmo com a possibilidade de vivenciarmos um número muito grande de mortes. Sua postura foi de opor as possíveis vidas perdidas pela pandemia com as vidas que poderiam ser atingidas pelo desemprego, a fome e o possível aumento da violência causado pelos dois.

---

16. Ver: <https://raquelrolnik.files.wordpress.com/2013/04/territo3b3rios-negros.pdf>

17. Nesse período, ocorreram manifestações e carreatas anti-isolamento e a favor do presidente. Em alguns desses episódios. Era comum nessas manifestações faixas e pedidos de intervenção militar, fechamento do Congresso Nacional e intervenção no STF.



Em muitos estados, como Rio de Janeiro e São Paulo, os governos divergiam do executivo nacional. Muitos governadores entenderam a necessidade de se fechar estabelecimentos e decretar isolamento, por vezes bastante severos como a forma de controlar a disseminação do vírus, tendo em vista que o sistema de saúde não suportaria atender muitas pessoas infectadas. Acirraram-se as disputas no sentido do poder executivo federal se colocar em oposição aos governadores e aos outros poderes. O presidente acusava os governadores de gerarem impactos negativos na economia e os governadores acusavam o presidente de não encarar a pandemia da maneira devida, abdicando do papel de coordenar a luta contra a doença e pela preservação da vida dos brasileiros.

O acirramento de ânimos levou o presidente à televisão aberta no dia 24 de março, quando fez um pronunciamento dizendo que se fosse acometido pelo coronavírus seus efeitos seriam como o de uma "gripezinha", um "resfriadinho". Argumentou que parte da imprensa buscava disseminar o "pavor" e alimentar a "histeria", que o Brasil não viveria o que a Itália viveu, pois aqui o clima é "totalmente diferente". Por fim, pediu para que se voltasse à normalidade e que os governadores abandonassem as políticas de "confinamento em massa", de "proibição de transportes" e de "fechamento de comércio". O governo federal chegou a esboçar o lançamento de uma campanha intitulada "o Brasil não pode parar", mas uma liminar da Justiça Federal suspendeu a iniciativa. Houve reação ao pronunciamento do presidente por parte de lideranças do poder legislativo e do poder judiciário, bem como da imprensa, de governadores e de movimentos sociais em todo o país.

A insatisfação do presidente com as medidas de prevenção e de tratamento à pandemia da Covid-19 também se evidenciou internamente ao governo. Em três meses o Brasil viveu a troca de dois ministros da saúde que não se submeteram às orientações presidenciais para o enfrentamento da pandemia. Além de anunciarem a necessidade de garantia do isolamento social e o uso de máscara como forma de evitar o colapso do sistema de saúde brasileiro, também não autorizaram a indicação oficial do uso do medicamento cloroquina e hidroxicloroquina defendido pelo presidente como a grande solução para lidar com a pandemia, mas descartados pela OMS, pela ineficácia para tratamento da Covid-19. Atualmente, o Ministério da Saúde está sob o comando de um general do exército que não possui formação na área médica. O mesmo acontece com o quadro técnico, anteriormente composto por um número pequeno de pessoas com formação



médica que vêm sendo substituídas por militares sem formação na área<sup>18</sup>.

Na cidade do Rio de Janeiro, em junho, ainda em momento em que o Estado estava na categoria “risco alto” no índice de contágio e apenas 4,4% dos leitos de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) disponíveis nos hospitais públicos, o prefeito Marcelo Crivella (Republicanos) anunciou a flexibilização gradual do isolamento social na cidade. Poucas semanas depois, Crivella anunciou a reabertura do comércio de rua e chegou a anunciar a volta de público nos estádios de futebol, mas recuou da decisão. Isso levou o Ministério Público do Rio de Janeiro (MP-RJ), junto da Defensoria Pública do Rio de Janeiro, a entrar com um pedido no Supremo Tribunal Federal (STF) para que fossem exigidos, tanto do governo quanto da prefeitura, estudos técnicos que dessem respaldo para as políticas de flexibilização do isolamento social<sup>19</sup>.

Desde a chegada da pandemia em nosso país vivemos um período de dissonâncias de decisões entre governos. A propagação de notícias falsas anunciando remédios milagrosos e descobertas da “cura da Covid-19” também proliferou. O comportamento do chefe de Estado e os constantes pronunciamentos do poder executivo foram fatores que influenciam negativamente o combate à Covid-19 e geraram um descrédito nos órgãos de pesquisas científicas nacionais e internacionais, por parte da população, influenciando negativamente na necessária adesão das pessoas às medidas para minimizar os impactos e prevenir dos riscos de contágio do coronavírus. Fica explícito que, atualmente, o país se orienta pela lógica da manutenção da economia e do mercado financeiro em detrimento das vidas das pessoas.

## Subnotificação e censura de dados: ataques ao direito à informação

Queremos destacar o aspecto fundamental evidenciado no ataque ao direito à informação nesse momento de crise. Como já mencionado anteriormente, identificamos como uma violação do direito à informação a supressão de informações oficiais fundamentais para análise dos impactos da pandemia, considerando as desigualdades estruturais em nossa sociedade. Sobre os aspectos relacionados à raça/cor, no

18. Em 20 de maio, o ministro interino da saúde autorizou novo protocolo para ampliar a recomendação de uso da cloroquina por pacientes contaminados pela Covid-19, a orientação valendo para todos os casos (leves, moderados e graves), mesmo sem a comprovação científica de eficácia do medicamento.

19. Ainda em maio, o prefeito buscou permitir a volta dos cultos presenciais nas igrejas, mas teve seu Decreto suspenso na Justiça. Politicamente o prefeito da capital passa a se aproximar do presidente da República, pois 2020 é um ano de eleições municipais no país.

Boletim de Monitoramento da Fiocruz, destaca-se o fato de que em 45% dos casos analisados essa informação não foi preenchida. A falta de informações com recorte racial vem sendo denunciada como uma barreira para entender as vulnerabilidades sociais e como a pandemia afeta diferentemente a negros e brancos<sup>20</sup>.

Nas favelas do Rio de Janeiro, de acordo com o painel Covid-19 nas Favelas<sup>21</sup>, que usa dados disponibilizados pelo painel da prefeitura, a cidade possuía 9.675 casos de coronavírus confirmados em favelas, com 1.415 óbitos. Porém, o monitoramento de casos feito por unidades locais da rede de saúde do próprio município demonstram que, ao menos em três favelas, Complexo do Alemão, Rocinha e Conjunto de Favelas da Maré, há uma quantidade maior de casos de infectados e óbitos por Covid-19.

Um levantamento feito junto aos médicos das comunidades revela que há subnotificações não somente por falta de testes, o que levou ao aumento do registro de casos e óbitos por doenças relativas à síndrome respiratória aguda, mas também porque a contabilização de casos pela prefeitura se baseia no CEP do paciente e isso leva ao mascaramento dos dados uma vez que a grande maioria das favelas não é reconhecida como um bairro. Mesmo quando há esse reconhecimento, como é o caso do Complexo do Alemão, reconhecido como bairro desde 1993, ainda existe uma imprecisão: a maioria dos CEPs que compõem a região indicam os bairros em que o Complexo está inserido, como Inhaúma, Ramos, Bonsucesso e Olaria. Sendo assim, no painel da prefeitura, os casos acabam sendo divididos nesses bairros, ao invés de aparecerem unificados como bairro Complexo do Alemão.

As subnotificações e o mascaramento dos dados são empecilho tanto para a cobrança de tomada de decisões para garantia de direitos, quanto para conseguirmos dimensionar de modo mais adequado os impactos da pandemia nos diferentes corpos e territórios.

---

20. O Movimento Coalizão Negra Por Direitos solicitou oficialmente providências do Ministério da Saúde para corrigir a questão da falta de dados com recorte racial e de gênero elaborado pelas autoridades nacionais. Esse elevado número de documentos onde foi ignorado a questão da raça/cor dificulta dimensionar a questão.

Dos casos onde essa informação foi preenchida temos que 26,9% dos casos confirmados foram com brancos; 25,8% com negros (pretos ou pardos); 2,1% são amarelos; e 0,06% são indígenas. É preciso destacar que quanto maior a concentração de favelas nos bairros, maior a proporção de pessoas negras contaminadas em relação às pessoas brancas. Em relação aos óbitos temos novamente a questão do não preenchimento por grande parte dos documentos da informação cor/raça, nesse caso, 41,7%. Dos óbitos onde essa informação não foi ignorada temos que 30,8% dos óbitos ocorreram com pessoas negras e 26,9% com pessoas brancas. Ver: [https://coalizaonegra.files.wordpress.com/2020/04/coalizaonegra\\_lai\\_mortesnegrascovid19\\_ms\\_final.pdf](https://coalizaonegra.files.wordpress.com/2020/04/coalizaonegra_lai_mortesnegrascovid19_ms_final.pdf)

21. Ver: <https://experience.arcgis.com/experience/8b055bf091b742bca021221e8ca73cd7/>



## Falta de garantia a condições de vida digna: trabalho, renda e alimentação

O governo federal promulgou, no dia 22 de março, a Medida Provisória (MP) N° 927, tratando da questão trabalhista na pandemia. Com esta MP se autorizou o teletrabalho, o direito de negociar a antecipação das férias, a criação de banco de horas a serem compensadas num momento pós-pandemia, a suspensão de recolhimento do FGTS, entre outras medidas. Dessa Medida, o que gerou imediatamente maior reação social foi o artigo 18, que autorizava a suspensão do contrato de trabalho por até quatro meses sem pagamentos de salário. A impopularidade da medida foi tamanha que, no dia seguinte, o governo federal promulgou a MP 928, que revogou esse artigo.

Objetivamente muitos(as) brasileiros(as) foram demitidos de seus empregos, ficando sem renda que lhes garantisse a sobrevivência nessa nova realidade, agravando a crise econômica e os índices de desemprego que já afetavam o país. Estudo realizado pelo Data Favela, revelou que quatro de cada cinco famílias de favelas (80%) pelo país estão vivendo com menos de metade da renda que recebiam antes da pandemia. Desses, 80%, mais de um terço relatou ter perdido toda a sua renda familiar, enquanto apenas 9% do total não tiveram alterações na receita ou apenas uma pequena queda<sup>22</sup>. Logo se iniciou uma mobilização social a nível nacional cobrando a necessidade de que o Estado garantisse uma renda mínima para os(as) trabalhadores(as) que tiveram perda da renda.

O governo chegou a anunciar um auxílio no valor médio de R\$ 191 ao longo de quatro meses para pessoas em vulnerabilidade, o que imediatamente suscitou críticas devido ao baixo valor do cupom anunciado. Era estimado um gasto de R\$ 15 bilhões e este valor era defendido pelo governo em nome da necessidade de manutenção do equilíbrio fiscal. Em contrapartida, o Banco Central anunciou a compra de títulos de instituições financeiras nacionais, com 10% de desconto em relação ao preço de mercado, num estoque estimado em R\$ 161 bilhões. Outro anúncio feito pelo Banco Central no mesmo período foi em relação à disponibilidade de R\$ 1,216 trilhões, cerca de 17% do PIB, para os bancos, com objetivo de assegurar o funcionamento dessas instituições financeiras e possibilitar o fornecimento de linhas de crédito para empreendimentos e clientes.

---

22. Ver: <https://bit.ly/2C22pa0>

Impulsionada por intensa mobilização dos setores da sociedade civil em articulação com representantes do Congresso Nacional, em abril o Congresso sancionou a aprovação do “auxílio emergencial” incluindo uma categoria ampla de trabalhadores(as) que tiveram impacto em suas rendas em função da crise econômica agudizada pela pandemia. O “auxílio emergencial” aprovado teve valor maior do que o inicialmente considerado pelo governo federal, uma renda básica de R\$ 600 por trabalhador, sendo que famílias com dois ou mais trabalhadores e com mães chefes de família poderiam receber até R\$ 1.200. O direito foi assegurado às pessoas com renda mensal de até três salários mínimos ou com renda per capita de até ½ salário mínimo. Poderiam acessar a política também os autônomos, informais, MEIs e desempregados. Essa foi uma importante conquista adquirida pela sociedade que precisou de grande mobilização e articulação para evitar que o governo federal implementasse a proposta inicial de renda de 200 reais por trabalhador. Observa-se ainda que, em alguns municípios, como o do Rio de Janeiro, também houve mobilização para a aprovação de uma renda básica municipal<sup>23</sup>.

Importante ressaltar que, na ausência de políticas públicas mais efetivas na garantia de direitos à população, instituições, coletivos, movimentos sociais e Ongs se destacaram na realização de ações para o enfrentamento da pandemia, como as evidenciadas na Carta organizada por coletivos de favelas no Rio<sup>24</sup> ou no documento elaborado pela Central Única das Favelas (Cufa)<sup>25</sup>. Dentre as muitas ações apontadas como necessárias, em relação à garantia do direito ao trabalho, renda e alimentação, destacou-se ampla discussão sobre a importância da isenção de taxas de serviços essenciais às populações em maior vulnerabilidade social, o adiamento das cobranças de serviços de luz e água, suspensão dos aluguéis, e também a necessidade de políticas de geração de renda e de segurança alimentar. Esses mecanismos possibilitariam melhores condições para o enfrentamento da pandemia para boa parte da população que viveu reduções de salários e impossibilidades de ganhar dinheiro em atividades informais o que levou a uma crescente diminuição de suas rendas.

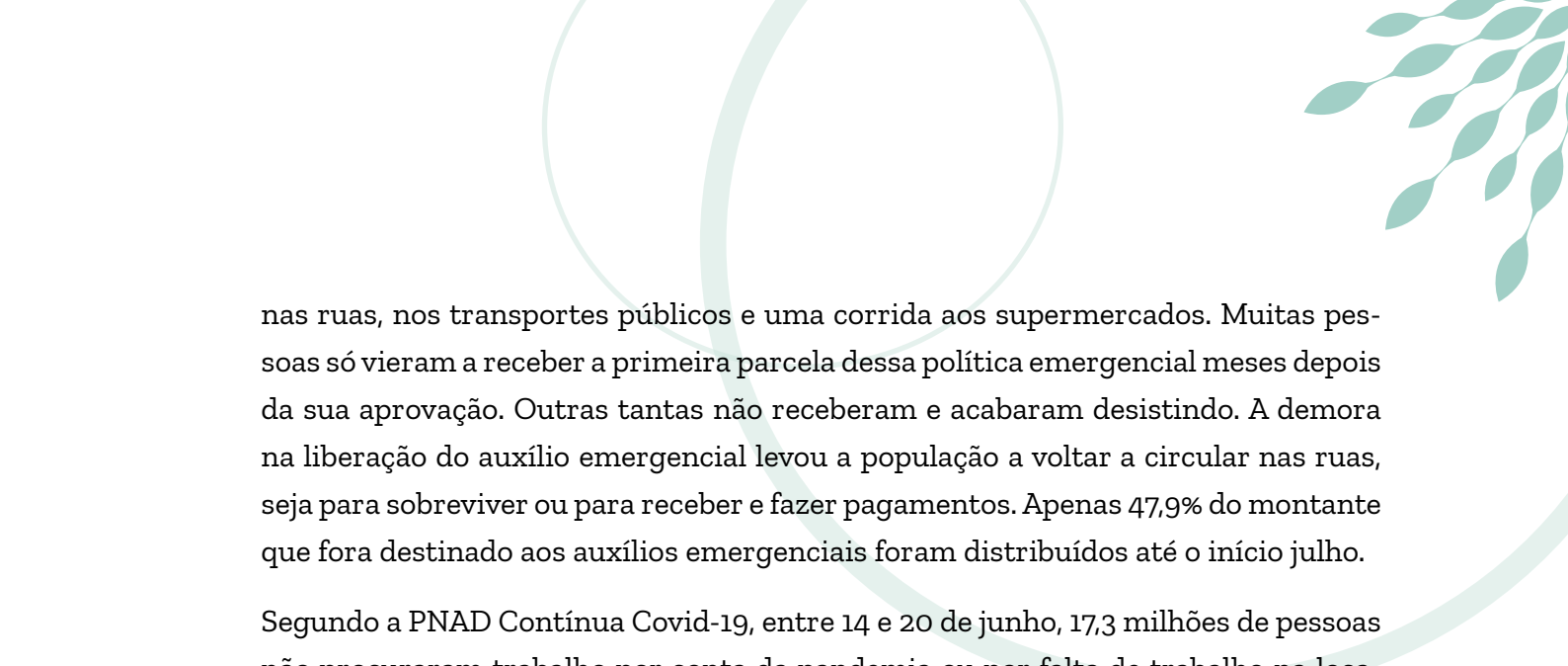
Aprovada a política, sua implementação teve inúmeras complicações relativas ao de acesso ao auxílio. Quando se iniciou a liberação dos pagamentos da renda básica, formaram-se filas enormes na frente dos bancos, contribuindo para aglomerações

---

23. Ver: <https://diariodorio.com/renda-basica-carioca-e-aprovada/>

24. Ver: [https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/PlanodeAcao\\_COVID19\\_e\\_FA-VELAS.pdf](https://www.redesdamare.org.br/media/downloads/arquivos/PlanodeAcao_COVID19_e_FA-VELAS.pdf)

25. Ver: <https://cufa.org.br/noticia.php?n=MjYx>



nas ruas, nos transportes públicos e uma corrida aos supermercados. Muitas pessoas só vieram a receber a primeira parcela dessa política emergencial meses depois da sua aprovação. Outras tantas não receberam e acabaram desistindo. A demora na liberação do auxílio emergencial levou a população a voltar a circular nas ruas, seja para sobreviver ou para receber e fazer pagamentos. Apenas 47,9% do montante que fora destinado aos auxílios emergenciais foram distribuídos até o início julho.

Segundo a PNAD Contínua Covid-19, entre 14 e 20 de junho, 17,3 milhões de pessoas não procuraram trabalho por conta da pandemia ou por falta de trabalho na localidade. Com dados de maio, verifica-se que 38,7% dos domicílios brasileiros receberam o auxílio emergencial, esse percentual vai para 31% quando se trata do estado do Rio de Janeiro. Ainda em maio, 18,3 milhões de pessoas ocupadas e não afastadas do trabalho trabalharam menos do que o habitual; 30,2 milhões de pessoas ocupadas (36,4%) tiveram rendimento efetivamente recebido do trabalho menor que o normalmente recebido. Tivemos 11,1 milhões de pessoas afastadas do trabalho devido ao distanciamento social, sendo que a maior proporção (33,6%) era a de trabalhadoras domésticas sem carteira assinada, seguida dos empregados do setor público sem carteira assinada (29,8%), dos empregados do setor privado sem carteira assinada (22,9%) e dos que atuam por conta-própria (22,5%). Foram 9,7 milhões de pessoas ocupadas que acabaram afastadas sem remuneração<sup>26</sup>.

Ainda segundo o IBGE, tínhamos apenas 49,5% das pessoas com idade para trabalhar ocupadas no trimestre que se encerrou em maio. “Pela primeira vez na série histórica, o nível da ocupação ficou abaixo de 50,0%, apontando que menos da metade da população em idade de trabalhar estava ocupada no trimestre”<sup>27</sup>.

Algumas profissões sentiram mais o impacto desse momento de crise, com destaque aos entregadores de aplicativos -que realizaram uma paralisação nacional (no dia 01 de julho) exigindo melhores condições de trabalho, considerando ainda a importância da adoção de medidas protetivas em relação ao risco de exposição à Covid-19; e às empregadas domésticas, categoria que tem quase de 70% das trabalhadoras na informalidade, sem a cobertura de direitos trabalhistas, e que acabaram tendo suas rendas fortemente impactadas<sup>28</sup>.

---

26. Ver: [Covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php](https://Covid19.ibge.gov.br/pnad-covid/trabalho.php)

27. Ver: [https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com\\_mediaibge/arquivos/8609435173ee0c0f82e9e0fb7550366e.pdf](https://agenciadenoticias.ibge.gov.br/media/com_mediaibge/arquivos/8609435173ee0c0f82e9e0fb7550366e.pdf)

28. Ver: <https://www.domesticalegal.com.br/seis-anos-apos-pec-das-domesticas-70-das-empregadas-estao-informais/>

Cabe destacar que, ainda no início do período de isolamento social, observou-se um aumento no preço de alimentos que compõem a cesta básica. Segundo a FGV, o crescimento da procura foi um dos principais fatores para esse aumento. Outro fator foi o aumento da estocagem por parte dos distribuidores devido o receio de que o período de confinamento se estendesse. Itens que compõem a cesta básica no Brasil, como o feijão e o arroz, são exemplos de alimentos que sofreram aumento logo após o começo da política de isolamento social<sup>29</sup>.

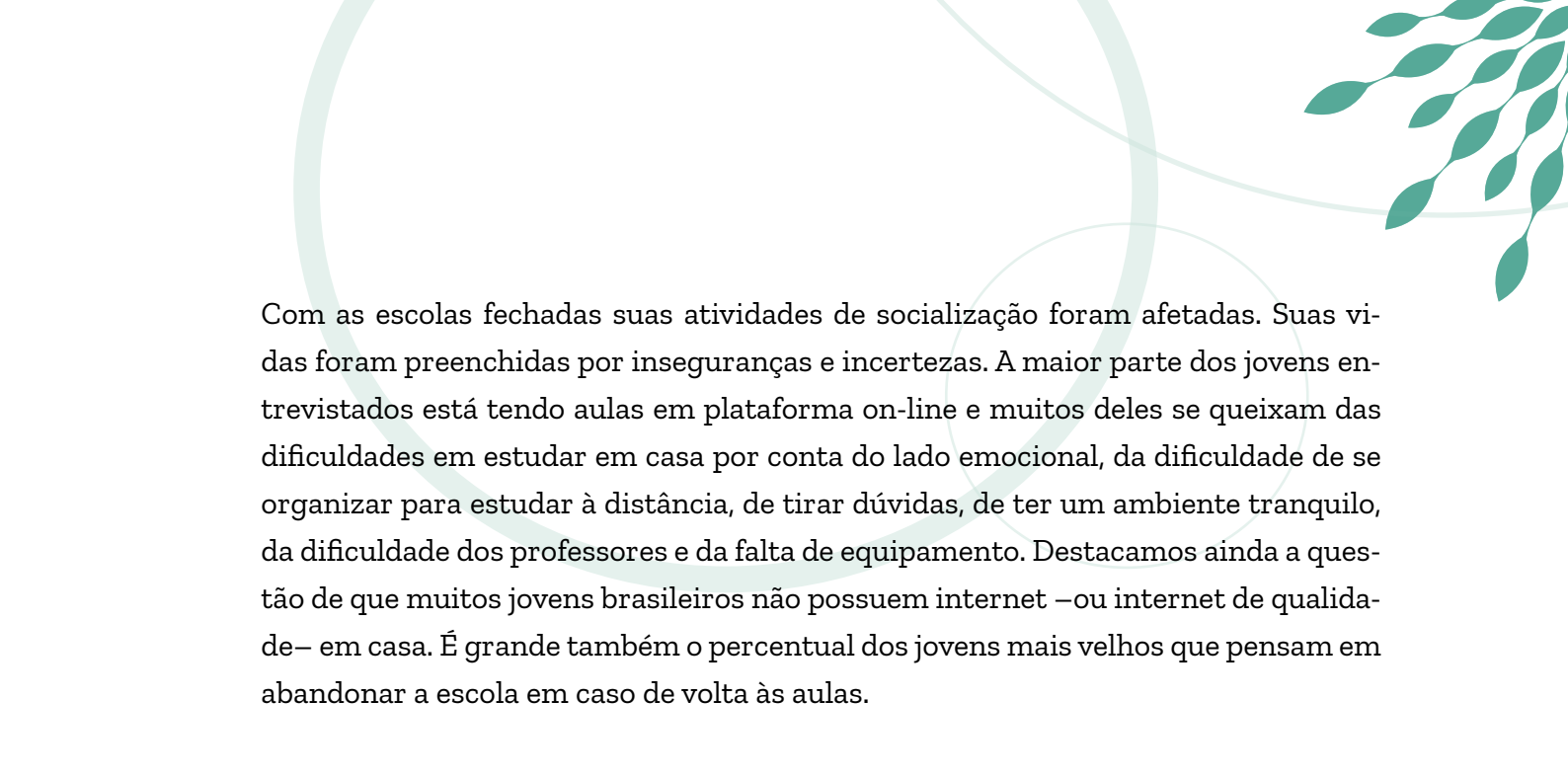
Coletivos como o Fórum Brasileiro de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e os diversos Conselhos de Segurança Alimentar e Nutricional pelo país buscaram formas de garantir o direito à alimentação durante a pandemia, principalmente às pessoas em maiores condições de vulnerabilidade social. No dia 7 de abril foi aprovado no Senado o Projeto de Lei 786/2020 que permitia a distribuição de alimentos adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) para pais/responsáveis de estudantes da rede pública de ensino durante a pandemia.

Considerando as juventudes, especialmente as juventudes de favelas e periferias, a falta de experiência e a vulnerabilidade ao desemprego acabam impulsionando muitos dos jovens ao trabalho na informalidade, muitas vezes em condições precárias e durante a pandemia do coronavírus, não foi diferente. Uma pesquisa elaborada pelo Conselho Nacional da Juventude sobre a situação dos jovens durante a pandemia constatou que muitos deles perderam renda, principalmente os jovens negros<sup>30</sup>. Nela, verifica-se que 60% dos jovens entrevistados têm alguém da família que buscou complementação de renda a partir das políticas governamentais. Muitos se queixaram ainda de problemas como ansiedade e fragilidade no estado emocional, medo, má qualidade do sono e da alimentação. Esse aspecto recrudescer um cenário que vem se agravando desde 2014 quando se observou que a taxa de desocupação entre jovens (de 14 a 29 anos) vem aumentando e chegando, em 2018, aos 22,3%. Também aumentou a quantidade de jovens que nem estudam nem trabalham, chegando a 23% dos jovens em 2018 – sendo de 27,9% para jovens de 18 a 24 anos e de 25,9% para jovens de 25 a 29 anos. O cenário econômico desfavorável tende a atingir mais fortemente esse público.

29. Ver: <https://valor.globo.com/brasil/noticia/2020/06/10/com-quarentena-alimentos-voltam-a-ser-principal-despesa-do-orcamento-das-familias-diz-ibge.ghtml>

30. Ver: Pesquisa Juventudes e pandemia do coronavirus, disponível em <https://www.juventudeseapandemia.com/>





Com as escolas fechadas suas atividades de socialização foram afetadas. Suas vidas foram preenchidas por inseguranças e incertezas. A maior parte dos jovens entrevistados está tendo aulas em plataforma on-line e muitos deles se queixam das dificuldades em estudar em casa por conta do lado emocional, da dificuldade de se organizar para estudar à distância, de tirar dúvidas, de ter um ambiente tranquilo, da dificuldade dos professores e da falta de equipamento. Destacamos ainda a questão de que muitos jovens brasileiros não possuem internet –ou internet de qualidade– em casa. É grande também o percentual dos jovens mais velhos que pensam em abandonar a escola em caso de volta às aulas.

## **Falta de garantia a condições de vida digna: direito à água e saneamento**

Em meio à luta por sobrevivência durante a pandemia, o direito à água ganhou foco tanto por possibilitar a higienização adequada como forma de prevenção ao coronavírus, quanto por colocar em evidência os territórios e populações que não têm acesso assegurado a esse bem fundamental para a vida. O acesso à água e ao saneamento básico nas favelas cariocas e nos bairros de periferia é extremamente precário, sendo muito comum tanto a falta d'água quanto a sua intermitência.

De acordo com dados do IBGE, 97,4% dos habitantes na cidade do Rio de Janeiro são atendidos pela rede de abastecimento de água. Esse dado, no entanto, não permite considerar questões referentes a qualidade da água, nem a regularidade do abastecimento nos diferentes territórios da cidade. Em relação ao esgotamento sanitário, 63,5% dos domicílios da cidade têm seu esgoto coletado e tratado. Já a coleta de lixo na porta somente para 44,7% da população. No Complexo do Alemão, local que o Ibase desenvolve um trabalho junto à jovens moradores, por exemplo, conforme os dados oficiais, sete das treze favelas que o compõem possuíam parte dos domicílios sem acesso à água de modo adequado (por meio da rede geral de abastecimento) e, conforme pesquisa realizada no Ibase em 2019, 33% dos(as) moradores(as) consideravam a qualidade da água que chega às torneiras de suas casas suja.

Nesse cenário que evidencia desigualdades de acesso a serviços básicos e essenciais que assegurem o direito à vida e saúde da população, temos enfrentado o avanço da política de privatização das concessionárias estatais responsáveis pelo tratamento de água e esgoto no país, tornando o debate sobre ampliação do acesso e garantia a



um direito fundamental uma questão de mero fornecimento de serviço a quem pode pagar. Entidades e movimentos da sociedade civil seguem mobilizados e empenhados para impedir a privatização do setor, mesmo assim, em meio ao contexto de pandemia, no dia 15 de julho, foi sancionado o PL 4162/19 pelo presidente, que institui um novo marco legal que deixa a legislação mais permissiva à privatização do setor.

## Colapso do Sistema Único de Saúde: ataques ao direito à saúde


O principal risco da pandemia da Covid-19 é a incapacidade dos sistemas de saúde absorverem a demanda por internações e tratamento, por isso a necessidade de se controlar o contágio por meio de medidas de isolamento social. Fora isso, a agilidade nas decisões governamentais para assegurar melhores condições para gerir a crise é essencial. No Brasil, como já evidenciado, esse não foi o rumo adotado.

Como parte da agenda ultraliberal implementada nos últimos anos, o desmonte Sistema Único de Saúde com o congelamento de verbas que gera desinvestimento e a desqualificação dos serviços são justificativas para a campanha pela privatização de um sistema que é um exemplo internacional. Uma das ações do governo Bolsonaro foi o anúncio do "Plano de Saúde Popular" que propõe a migração dos atendimentos da população para planos privados de saúde por meio de um duplo financiamento: dos próprios usuários e a complementação do Estado. A medida ainda não foi de fato implantada, mas representa mais uma forma de garantir apropriação privada do fundo público, transformando um direito assegurado constitucionalmente em mercadoria.

Neste momento os escândalos de corrupção envolvendo superfaturamento de orçamentos para compra de respiradores e construção dos hospitais de campanha, somado ao discurso anti-isolamento e a disseminação de informações sobre a precariedade e mau funcionamento da rede pública ganharam destaque em canais de informação pró-privatização.

Apesar do anúncio de destinação de recursos para construção de hospitais de campanha visando atendimento à população, o que de fato vivenciamos na rede pública foi a dificuldade de acesso a leitos com respiradores e um número bastante reduzido de testagens, medida essencial para planejamento do tratamento adequado à paciente e das medidas de abertura às atividades. Em contrapartida, a rede privada de saúde disponibilizou a realização de testes laboratoriais (com envio de uma equi-





pe domiciliar para realizar o teste), mesmo em pacientes fora da janela de contágio ou sem sintomas, tanto para identificar a Covid-19 quanto para a realização do Teste de Anticorpos Coronavírus (IgG e IgM).

Em levantamento recente realizado pela Fiocruz<sup>31</sup>, verificou-se que apesar de, em números absolutos, a quantidade de leitos de UTI não serem tão diferentes entre a rede pública e privada, quando se considera o contingente da população que pode acessar um ou outro setor, observa-se que, neste momento, um brasileiro com plano de saúde tem mais que o triplo de chance de ter acesso a um leito de UTI do que os outros 77% da população que dependem exclusivamente do Sistema Único de Saúde.

Diante dessas evidências, setores da sociedade civil se articularam na campanha “Leitos para Todos”, lançando um manifesto que reivindicava a unificação das filas nos hospitais públicos e privados, sob gestão do Estado, convocando o poder público a tomar atitudes muito mais enfáticas para garantir atenção a todos os casos, independente da capacidade de pagamento. O resultado, no entanto, permanece sendo a distinção de tratamento entre os que têm acesso à saúde como mercadoria e os que a acessam como direito a ser assegurado para todos e todas.

## O Estado e a violação do direito à vida segura

Nas primeiras semanas de chegada da pandemia ao país, observou-se uma queda de 23% nas operações policiais violentas, nas incursões nas favelas, empreendidas para combater o comércio ilícito de drogas no Rio. No entanto, já em abril, no momento em que vêm à tona as suspeitas de desvio das verbas destinadas à construção e equipagem dos hospitais de campanha por membros do Governo Estadual, as mortes provocadas por policiais sofreram um forte aumento, e a velha retórica de guerra ao crime organizado ganha a cena pública do Rio de Janeiro. Foram 177 óbitos decorrentes de intervenções de agentes públicos, em comparação com abril do ano de 2019 tivemos um acréscimo de 43%.

Mesmo num período sensível como o de enfrentamento da pandemia a polícia militar do Rio de Janeiro dá continuidade à sua política de morte. Essa política praticada em todo o território nacional, onde esse tipo de operação cresceram 26% durante a pandemia. O Estado além de não assegurarem as condições básicas de vida para as

---

31. Ver: <https://portal.fiocruz.br/noticia/especialistas-analisam-disponibilidade-de-leitos-no-pais-e-discutem-possibilidades>

peças que vivem nesses territórios vulnerabilizados, segue sendo um dos principais violadores de direitos.

Um caso emblemático nesse período foi o assassinato do menino João Pedro, negro, de 14 anos, morto dentro de casa em ação da polícia federal e da polícia civil no Complexo do Salgueiro, em São Gonçalo, cidade da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O caso de João Pedro teve forte repercussão midiática. Foi denunciado à ONU por parlamentares brasileiros. Chegou a levar centenas de pessoas às ruas em uma associação ao movimento Black Lives Matter (Vidas Negras Importam), que ganhou força nos EUA por conta do brutal assassinato de George Floyd<sup>32</sup>.

Após intensa mobilização da sociedade civil, o Supremo Tribunal Federal proibiu a realização de operações policiais em favelas e comunidades no estado do Rio de Janeiro durante a pandemia do coronavírus, sendo somente permitida em “hipóteses absolutamente excepcionais”. Para que ocorressem operações passou a ser necessário justificar por escrito e realizar comunicação imediata ao Ministério Público. O ministro acrescentou que quando ocorressem operações deveriam ser tomados cuidados para não colocar a população em risco e não impedir a prestação de ajuda humanitária, nem de serviços públicos sanitários.

## As violações dos direitos de meninas e mulheres

A pandemia também afetou fortemente as mulheres na garantia de meios de subsistência, principalmente as trabalhadoras informais. Quase metade dos lares brasileiros é sustentada por mulheres<sup>33</sup> e, historicamente, os rendimentos médios das mulheres são menores do que dos homens e, ainda, os rendimentos médios de mulheres

32. Em junho de 2020, a Coalizão Negra por Direitos lançou o manifesto “Enquanto houver racismo, não haverá democracia”. Sabemos, no entanto, que a impunidade contra crimes do tipo no Rio de Janeiro é muito grande.

Ver: “Ciclo de impunidade em operações policiais com mortes ronda o caso Ágatha: Estudos mostram que mais de 90% dos casos de mortes cometidas por agentes do Estado não são investigados ou acabam arquivados” [https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066\\_395793.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html).

Ver: “Ciclo de impunidade em operações policiais com mortes ronda o caso Ágatha: Estudos mostram que mais de 90% dos casos de mortes cometidas por agentes do Estado não são investigados ou acabam arquivados” [https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066\\_395793.html](https://brasil.elpais.com/brasil/2019/10/03/politica/1570057066_395793.html).

33. De 2014 até 2019 quase 10 milhões de mulheres assumiram a posição de chefes de família: [https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/02/16/internas\\_economia,1122167/quase-metade-dos-lares-brasileiros-sao-sustentados-por-mulheres.shtml](https://www.em.com.br/app/noticia/economia/2020/02/16/internas_economia,1122167/quase-metade-dos-lares-brasileiros-sao-sustentados-por-mulheres.shtml)



negras são menores do que o de mulheres brancas. Já na cidade do Rio de Janeiro a diferença salarial média no emprego formal entre brancos e negros é de 41,9%.

Conforme alerta publicado pela ONU Mulheres<sup>34</sup>, em relação à América Latina e Caribe, as mulheres são maioria na linha de frente no combate à pandemia ocupando cargos de profissionais de saúde, apesar de serem minoria nas esferas de tomada de decisão<sup>35</sup>. Cabe observar que muitas vezes recai sobre elas a tarefa de cuidados no lar, sendo ainda mais afetadas pelo aumento do trabalho não remunerado. Somam-se a isso os cuidados com as pessoas doentes, idosos e crianças. Muitas vezes a rotina de cuidados deve ser conciliada com a de trabalho, gerando uma sobrecarga enorme com fortes consequências físicas e psicológicas.

Segundo a ONU Mulheres, o isolamento social vem ocasionando o aumento da violência contra mulheres e meninas. O Instituto de Segurança Pública do RJ informou que, durante o primeiro período do isolamento social (de 13 de março a 30 de abril), o número de registros de ocorrência de violências contra a mulher diminuiu ao se comparar com o mesmo período em 2019, o que consideram ser consequência da restrição de circulação das pessoas nas ruas. Assim, haveria uma subnotificação dos crimes contra a mulher. As dificuldades impostas pela pandemia influenciam nas respostas possíveis a tais situações, muitas vezes impede a fuga das agressões e o acionamento de recursos legais. A crise econômica vivida conjuntamente à pandemia pode muitas vezes ser outro obstáculo à fuga de parceiros violentos.

Alguns dados são muito preocupantes, como o aumento verificado para os crimes graves ocorridos em casa. Os crimes de violência física e de violência sexual cresceram, passando, respectivamente, de 60,8% e 55,4%, em 2019, para 68,8% e 72,4%, no mesmo período em 2020. Também aumentou o número de ocorrências recebidas pelo Serviço 190<sup>36</sup>: foram 13.065 ligações referentes a crimes contra a mulher –10,9% do total de ligações e um aumento de 12% se comparado com o mesmo período em 2019<sup>37</sup>.

---

34. Ver: [http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19\\_LAC.pdf](http://www.onumulheres.org.br/wp-content/uploads/2020/03/ONU-MULHERES-COVID19_LAC.pdf)

35. "Wermelinger et al (2010) identificaram, a partir dos dados censitários do Brasil sobre a nossa força de trabalho em saúde, o fenômeno da feminização da força de trabalho na saúde. Dos trabalhadores de nível superior nessa área elas são 90,39% entre as enfermeiras; 95,31% entre as nutricionistas, e, no entanto, entre os médicos, elas representam apenas 35,94%. Já, entre os profissionais de nível médio elas são 77,88% das técnicas em fisioterapia e afins, 78,03% das atendentes de enfermagem, parteiras e afins, e 86,93% das técnicas e auxiliares de enfermagem. A situação do Serviço Social é praticamente idêntica" (<https://www.geledes.org.br/pandemia-covid-19-e-as-mulheres/>).

36. O 190 é um serviço de emergência destinado ao atendimento da população nas situações de emergenciais policiais.

37. Ver: <https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-06/no-rio-crime-de-violencia->

As denúncias de violência contra as mulheres realizadas pelo canal 180<sup>38</sup> também cresceram significativamente desde março: aumentou 13,35% em fevereiro, 17,89% em março, 37,58% em abril, quando comparados ao mesmo período de 2019.

A violência doméstica e familiar é a principal causa de feminicídio não só no Brasil, mas em todo mundo. Diante da gravidade do problema, várias campanhas foram construídas por movimentos sociais instruindo mulheres com formas de proceder a denúncia das violências sofridas de modo seguro, garantindo a preservação da sua integridade física e de suas vidas.

## A cidadania ativa no contexto da pandemia

Destacamos ao longo do texto que, diante da falta de políticas públicas eficientes para o enfrentamento à crise ocasionada pela pandemia da Covid-19, sobretudo para os espaços de favelas e periferias, as mobilizações da sociedade civil foram fundamentais para propor medidas de mitigação aos seus impactos. Destacamos as ações locais e emergenciais destinadas a garantia de itens básicos para sobrevivência da população mais vulnerabilizada, visando angariar recursos para a compra de alimentos, de produtos de limpeza e de higiene. As arrecadações on-line foram muito utilizadas por coletivos de territórios vulneráveis, mas também por categorias laborais, como ambulantes e artistas de rua.


Nesse âmbito, destacamos, por exemplo, a articulação realizada no Rio de Janeiro entre lideranças das favelas da Maré, Complexo do Alemão, Cidade de Deus, Santa Marta e Rocinha, com participação de pesquisadores da UFRJ, PUC-Rio e UERJ –em diálogo com a Fiocruz– para elaboração de um plano de ação para o enfrentamento da Covid-19 com foco nas especificidades das favelas. A campanha se estruturou em torno de quatro eixos: segurança alimentar, geração de renda, acesso a direitos e à informação segura<sup>39</sup>. Em vários locais, como na Maré e no Complexo do Alemão foram abertos canais de comunicação popular. Mostrou-se necessário informar à população sobre o que se passava no território e para isso foram criados canais colaborativos, como a página “Favelas contra o coronavírus”.

---

contra-mulher-aumentou-10-na-quarentena

38. O Ligue 180 é a Central de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, um serviço de utilidade pública, gratuito e confidencial (preserva o anonimato) oferecido pela Secretaria Nacional de Políticas, desde 2005. Tem por objetivo receber denúncias de violência e reclamações sobre os serviços de atendimento à mulher.

39. Ver: <https://mareonline.com.br/coronavirus/campanha-mare-diz-nao-ao-coronavirus-inicia-nova-etapa/>



É preciso destacar que, embora muito importantes as ações de auto-organização e de solidariedade, em relação à totalidade das pessoas que vivem em favelas e espaços populares e periféricos no Brasil, tais ações possuem alcance limitado. Em certa medida, movimentos deste tipo são possíveis graças à organização pré-existente nos territórios e não é verdade que podemos contar com a mesma organização em todos os territórios vulnerabilizados. Por isso se faz importante também defender a construção de políticas públicas, que permitam maior amplitude às ações.

## **Uma agenda para o presente em busca de um novo futuro**

A pandemia evidenciou ainda mais as desigualdades presente no Brasil. Mostrou-nos que a superação dessas desigualdades exige ações conjuntas envolvendo Estado e sociedade civil. É preciso investimento em setores que garantam a vida e a dignidade humana. É preciso que haja orçamento para o investimento adequado nos setores sociais como a saúde pública. Precisamos sair desta pandemia com o entendimento de que o Sistema Único de Saúde precisa ser fortalecido e valorizado. Nesse sentido, a revogação do teto dos gastos se faz necessária e urgente, pois o desinvestimento na operação e manutenção dos hospitais públicos, das indústrias de material hospitalar e dos setores de pesquisa científica, ocasionou a calamidade vivenciada pela nossa sociedade na gestão de saúde pública neste momento pandêmico. Precisamos retomar a consciência de que as políticas públicas devem garantir a vida. Precisamos ver a solidariedade e a necessidade respeito à vida, suscitados neste momento, como elementos de retomada da discussão da efetivação de direitos, para o avanço coletivo.

Denunciamos o nível de barbárie que estamos vivendo no Brasil a partir da postura de amplos setores da iniciativa privada e pessoas que concentram riquezas no país, para os quais a ânsia do lucro supera o direito à vida e à dignidade humana.

A experiência da renda básica pode trazer frutos também. Retoma a cena pública esta discussão como uma política permanente de combate à fome e à miséria. Apesar de boa parte da elite e das camadas médias condenarem políticas como o Bolsa Família, as políticas de distribuição de renda mostram grande sucesso no combate à pobreza extrema e à insegurança alimentar. O momento que vivemos recoloca a discussão de que é preciso garantir condições mínimas de existência para a população mais vulnerabilizada.

A garantia do acesso a direitos e a serviços básicos são medidas que impulsionam a qualidade de vida e que fortalecem a democracia. Não acreditamos numa democracia na qual as pessoas não acessem a água, em que as pessoas passam fome, em que não consigam atendimento médico, ou em que jovens tenham que “escolher” entre trabalhar ou estudar, sem igualdade de raça e gênero. É preciso o entendimento de que a democracia exige condições mínimas de existência e de igualdade na diversidade de corpos, territórios e culturas.

Dos requisitos básicos para o fortalecimento da democracia destacamos ainda a liberdade de imprensa, a necessidade de transparência (dos gastos públicos e das decisões), a necessidade de uma sociedade civil forte (o que implica em reverter o processo de criminalização dos movimentos sociais) e de canais de participação na gestão pública. É preciso que a sociedade civil tenha espaço institucionais para colocar suas demandas, discutir e orientar políticas públicas.

No sentido exposto acima, vivenciamos cotidianamente muitas experiências nas quais aparecem bons exemplos de como a sociedade consegue se organizar, apresentar suas demandas e orientar ações de incidência. É preciso fortalecer esses movimentos, aumentar a atuação em rede, conectando coletivos, pessoas, lutas, pautas e agendas.

A democracia que queremos não é a “democracia” que vivemos. O que experienciamos até aqui foi uma democracia que não incluiu grande parcela de nossa população excluída dos direitos de cidadania, dos espaços de representação e participação cidadã. Precisamos avançar em muitos aspectos. Não há democracia com racismo, com machismo, com violência institucionalizada. Não há democracia sem que a diversidade dos corpos que compõe a nação esteja representada nos espaços decisórios de poder. É preciso retomar os espaços cívicos e os mecanismos que garantam a participação social. A sociedade tem muito a contribuir –como vem contribuindo no combate à pandemia– num momento de retomada e de construção de uma agenda para o presente em busca de um novo futuro.



## Referências

- Mbembe, A. (2018). *Necropolítica*. N-1 Edições.
- Rolnik, R. (1989). Territórios negros nas cidades brasileiras – etnicidade e cidade em São Paulo e Rio de Janeiro. *Revista Estudos Afro-asiáticos* 17 – CEAA, Universidade Cândido Mendes.
- Wermelinger, M. et al. (2010). "Feminilização do Mercado de Trabalho em Saúde no Brasil: focalizando a feminização". *Divulgação em Saúde para Debate, Rio de Janeiro*, n. 45, p. 54-70.



**A POLÍTICA BRASILEIRA  
E A SOCIEDADE CIVIL  
POSSIBILIDADES E  
LIMITES DA CONSTRUÇÃO  
DE ESTRATÉGIAS DEMOCRÁTICAS  
MAIS AMPLAS E INCLUSIVAS  
PARA O PÓS-PANDEMIA**

**BIANCA ARRUDA,  
RITA BRANDÃO Y  
RENAN DE OLIVEIRA RODRIGUES**

UN PROYECTO DE:



CON APOYO DE:



**IDRC | CRDI**

International Development Research Centre  
Centre de recherches pour le développement international